

De: GHA NOTIFICACIONES ABOGADOS <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: martes, 23 de noviembre de 2021 3:39 p. m.

Para: Juzgado 15 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN|DEMANDANTE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
COLBOLETOS|DEMANDADO AMÉRICA DE CALI S.A. EN REORGANIZACIÓN Y OTROS|RAD.
76001310301520180012000|MCMD.

Señores

JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Referencia: Proceso de Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. – COLBOLETOS vs. América de Cali S.A. en Reorganización.

Radicado: 76001310301520180012000.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, en mi calidad de apoderado especial de **ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. COLBOLETOS**, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 806 de 2020, en el Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de junio de 2020 y demás normas concordantes, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, en sustitución de los artículos 14 y 32 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente elevo la petición adjunta al presente correo electrónico.

El presente mensaje de datos no es copiado a la parte demandada, debido a que el escrito refiere a una solicitud de MEDIDA CAUTELAR.

Agradezco confirmar la recepción del documento.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

CC. No. 19.385.114 de Bogotá

T.P. 39.116 del C.S. de la J.

Señores

JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Referencia: Proceso de Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. – COLBOLETOS vs. América de Cali S.A. en Reorganización.

Radicado: 76001310301520180012000.

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional No 39.116 del C. S. de la J., obrando como apoderado especial de **ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. COLBOLETOS**, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, en sustitución de los artículos 14 y 32 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente elevo la presente petición en los siguientes términos:

HECHOS

1. Mediante memorial radicado el día 27 de septiembre de 2021, mi procurada (i) presentó una nueva solicitud de medida cautelar, consistente en la inscripción de demanda sobre el registro marcario de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde reposa la información de las marcas propiedad de América de Cali S.A. En Reorganización, y (ii) aportó la Póliza de Seguro Judicial, en cumplimiento de lo ordenado por el despacho mediante Auto de Trámite número 0398 de fecha 20 de mayo de 2019, y lo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de providencia notificada el pasado 20 de septiembre de 2021.
2. Teniendo en cuenta que dicho memorial contenía una petición de medida cautelar, en el correo electrónico remitido **se advirtió que por ese motivo no se copiaría a las partes del proceso.**
3. A pesar de lo anterior, y de que a la fecha el escrito en cuestión no ha sido anexado al expediente digital, el apoderado judicial de la parte actora radicó el día 06 de octubre de la misma anualidad, “*pronunciamento frente al decreto de medidas cautelares*”, en el que hizo **expresa referencia a la presentación de la póliza por parte de mi procurada.**
4. El incumplimiento a la debida reserva que la ley ha previsto y que debió tenerse frente a un asunto de tan importante cautela, justifica aún más que el despacho judicial dé celeridad al trámite pertinente, y proceda con el decreto de dichas medidas, a fin de garantizar el pago de los perjuicios causados a mi procurada, por el incumplimiento contractual y la terminación injustificada del contrato objeto de litigio, destacando igualmente que, como es de conocimiento del despacho, la sociedad demandada **actualmente se encuentra bajo el régimen de reorganización empresarial de que trata la ley 1116 de 2006 y por tanto, los recursos para cumplir la obligación que puede derivar de la condena del presente proceso, puede estar comprometida por el pago de otras de sus obligaciones con distintos acreedores.** En tal sentido, resulta urgente que el despacho dé trámite a las medidas cautelares solicitadas.

PETICIÓN

Respetuosamente, solicito al despacho se sirva (i) dar trámite a la solicitud de medidas cautelares presentada por mi procurada el pasado 27 de septiembre de 2021, y (ii)

continuar lo pertinente respecto a la petición de las medidas iniciales solicitadas con la demanda, en virtud de la Póliza de Seguro Judicial allegada oportunamente por mi procurada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El derecho de petición se encuentra reglamentado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, tal como se cita a continuación:

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Dicho precepto normativo prevé la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, respecto a cualquier inquietud, solicitud de información y queja que quieran manifestar. En consecuencia, de ello, dar una respuesta constituye una obligación para las autoridades, esta debe ser entregada a la persona que ejerce tal derecho, satisfaciendo ciertas condiciones, como lo son dar una respuesta pronta y de fondo respecto a las peticiones elevadas, por lo cual esta deberá ser congruente con lo solicitado por el peticionario, sin que ello implique que debe ser satisfactoria respecto de lo solicitado. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado, en sentencia T-667/11:

“Con fundamento en la norma constitucional, la Corte Constitucional ha sostenido que el ámbito de protección del derecho fundamental de petición comprende los siguientes elementos:

- 1. El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.*
- 2. El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.*
- 3. El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.*
- 4. El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.*

En consideración de los elementos referidos, la Corte ha indicado que el amparo del derecho fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se entienda que la protección constitucional se deriva de la contestación favorable a las pretensiones formuladas. Al respecto, en la sentencia T-561 de 2007, la Corte explicó:

“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario. La efectividad de la respuesta depende de que se solucione el caso que se plantea. Por último, la congruencia exige que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.”

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la falta de competencia para pronunciarse sobre la solicitud presentada, no significa que la autoridad ante la cual se formuló, se encuentre exenta de pronunciarse al respecto. En este caso, la Corte ha señalado que la autoridad aludida debe manifestar tal circunstancia al peticionario, pues de otra manera, se entiende que dicha autoridad vulneró el derecho fundamental de petición del solicitante. Así mismo, ha afirmado que además de la contestación de la solicitud presentada, la autoridad correspondiente debe adelantar las actuaciones necesarias para que la decisión tomada sea comunicada de manera oportuna al peticionario.

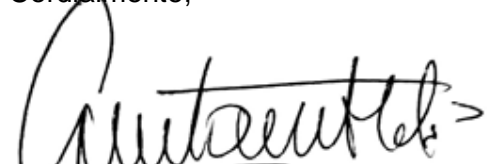
Respecto de este derecho la Corte constitucional ha manifestado, en sentencia T-667/11, lo siguiente:

“El derecho de acceso a la información está relacionado íntimamente con el derecho de petición, el cual es el medio para solicitar y obtener dicha información. Esto, en tanto en las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 23 de la Constitución se puede solicitar la entrega de información o el acceso a documentos” (Negrilla por fuera del texto original).

NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones sobre el particular en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Email: notificaciones@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.